

Sembrando paz con nuestros jóvenes, desde la costa pacífica nariñense

Sowing peace with our young people, from the Pacific coast of Nariño

Edgardo Mafla Hidalgo¹

Amanda Andrade²

Lida Consuelo Aranzazu Caicedo³

Resumen

La presente investigación “Re significación de las representaciones sociales, acerca del sentido de vida de los participantes de Tumaco y Ricaurte en el convenio interadministrativo UNAD-MEN con enfoque de cambio climático”, se realizó con el objetivo de interpretar aquellas representaciones sociales presentes en el quehacer cotidiano de los estudiantes de la alianza agroforestal para el desarrollo rural, matriculados en la Tecnología de Sistemas Agroforestales, Tecnología de Producción Animal y en el Programa Técnico en Materias Primas Agroindustriales, acerca del sentido de comunidad, con el fin de generar una propuesta que fortalezca dicho sentido, la pertenencia y la integración social en el futuro rol del profesional haciendo énfasis en el enfoque de cambio climático teniendo en cuenta que a futuro es desde sus profesiones que pondrán en marcha sus propuestas de transformación y contribución al desarrollo sostenible de sus propios territorios.

Es por ello que desde la teoría de la psicología social comunitaria se pretende lograr el aporte descriptivo y facilitar en los participantes herramientas necesarias para consolidar el proceso de re significación de las representaciones sociales y los conceptos de comunidad, sentido de vida, proyecto de vida, para su reinserción en la sociedad, a la productividad y a la reconstrucción del tejido social, con enfoque de cambio climático. Para ello el equipo investigador consideró pertinente abordar esta investigación desde el paradigma cualitativo, con enfoque histórico hermenéutico, a través de un método etnográfico.

Igualmente, se consideró oportuno utilizar dentro del marco teórico temáticas como: representaciones sociales, creencias, comunidad, individuo, grupos, psicología, psicología social, psicología comunitaria, educación, conflicto armado. En el enfoque psicológico, se tomó la teoría de Albert Bandura, abordando el enfoque socio-cognitivo.

Para alcanzar los resultados, se aplicaron técnicas como: la observación, diario de campo, técnicas asociativas, entrevistas, encuestas, grupo focal y encuentros presenciales. Teniendo en cuenta que lo se busca con la investigación, es que los estudiantes resignifiquen sus representaciones sociales, así como sus conductas y creencias para consolidar sentido y proyecto de vida a través de su formación profesional en aras de favorecer su calidad de vida, así como la de sus territorios

1 Magister, psicólogo, Edgardo Mafla Hidalgo, Tutor UNAD, Correo electrónico: edgardom2006@gmail.com

2 Especialista, psicóloga, Amanda Andrade, Profesional Psicosocial UNAD. Correo electrónico: zoraidaandrade72@yahoo.es

3 Psicóloga Msc (e), Lida Consuelo Aranzazu Caicedo, Docente Ocasional ECSAH UNAD. Correo electrónico: lida.aranzazu@unad.edu.co

La convocatoria de recepción de artículos para el presente número se amplió hasta julio de 2018. Lo anterior, con la finalidad de cumplir las exigencias de las políticas editoriales en lo correspondiente a número mínimo de artículos publicables por volumen.

Tumaco - Ricaurte, como también la búsqueda de horizontes más humanistas que enmarquen el camino a la transformación de paz y del cuidado del medio ambiente.

Palabras clave: Colombia, conflicto armado, democracia, Estado, soluciones, paz, violencia.

Abstract

The present investigation “Resignification of the social representations, about the sense of life of the participants of Tumaco and Ricaurte in the UNAD-MEN inter-administrative agreement with a focus on climate change”, was carried out with the objective of interpreting those social representations present in the daily work of students of the agroforestry alliance for rural development, enrolled in the Technology of Agroforestry Systems, Technology of Animal Production and the Technical Program in Agroindustrial Raw Materials, about the sense of community, in order to generate a proposal that Strengthen this sense, belonging and social integration in the future role of the professional by emphasizing the approach to climate change taking into account that the future is from their professions that will implement their proposals for transformation and contribution to the sustainable development of their own territories.

That is why from the theory of community social psychology is intended to achieve the descriptive contribution and provide participants with the necessary tools to consolidate the process of resignification of social representations and concepts of community, meaning of life, life project, for their reintegration into society, productivity and the reconstruction of the social fabric, with a focus on climate change. To this end, the research team considered it pertinent to approach this research from the qualitative paradigm, with a historical hermeneutical approach, through an ethnographic method.

Likewise, it was considered appropriate to use within the theoretical framework topics such as social representations, beliefs, community, individual, groups, psychology, social psychology, community psychology, education, armed conflict. In the psychological approach, the theory of Albert Bandura was taken, addressing the socio-cognitive approach.

To achieve the results, techniques were applied such as observation, a field diary, associative techniques, interviews, surveys, focus group, and face-to-face meetings. Bearing in mind that what is sought with research, is that students resignify their social representations, as well as their behaviors and beliefs to consolidate meaning and life project through their professional training in order to promote their quality of life, as well as the one of its territories Tumaco - Ricaurte, as well as the search of more humanistic horizons that frame the way to the transformation of peace and the care of the environment.

Keywords: Colombia, armed conflict, democracy, state, solutions, peace, violence.

Recibido: 03-08-17 / **Aceptado:** 12-01-18⁴

Introducción

Para empezar, es importante resaltar que, dentro del panorama regional, el caso colom-

biano cuenta con la particularidad de tener la insurrección armada más extendida de América Latina, pues “sus orígenes datan de los comienzos de los años sesenta, de la época inmediatamente posterior a la revolución cubana y de las ofensivas nacionales contra las llamadas «repúblicas independientes»” (Chernick, 1996, p. 4). No obstante, si bien

⁴ La convocatoria de recepción de artículos para el presente número se amplió hasta julio de 2018. Lo anterior, con la finalidad de cumplir las exigencias de las políticas editoriales en lo correspondiente a número mínimo de artículos publicables por volumen.

las guerrillas armadas se conformaron en la década de los sesenta, los conflictos sociales internos tienen antecedentes que aparecen desde comienzos de siglo.

El ingreso de las FARC a los municipios costeros de Nariño fue el resultado del traslado de esta agrupación guerrillera y de los cultivos ilícitos hacia Tumaco después de que los departamentos de Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare se convirtieran en objetivo del principal componente del Plan Colombia. Además, estos últimos departamentos también fueron focos de operaciones de las fuerzas militares, fortalecidas tras la reforma militar que empieza en 1999 y que continuaron durante la Política de Defensa y Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.

La llegada de las FARC vino acompañada de una bonanza cocalera en Tumaco, que a su vez atrajo colonos y raspachines provenientes de diferentes lugares del país e incluso de Brasil y Perú⁴³, quienes se ubicaron en territorios cercanos a la carretera Tumaco-Pasto, en la frontera con Ecuador y en menor medida en los corregimientos Mexicano, Rosario y Caunapí. Al municipio llegaron también narcotraficantes, distribuidores de insumos químicos, comerciantes, trabajadoras sexuales, entre otros, que se ubicaron en los corregimientos de Llorente y La Guayacana, conocidos por ser los principales puntos de acopio de droga y de comercialización de insumos, pasta de coca y armamentos.

Las dinámicas del conflicto armado en el departamento de Nariño se caracterizan por una alta intensidad producto de la disputa entre los actores armados con presencia en la zona, lo que se explica por la posición geográfica estratégica del departamento al ser una zona limítrofe con el Ecuador y una salida al Pacífico. Los análisis realizados sobre el conflicto armado en el departamento de Nariño han identificado el narcotráfico como causa determinante del conflicto, aunque no es el único factor, temas como la tierra, la explotación minera, recursos petroleros, la construcción de mega proyectos son

igualmente factores determinantes para el análisis del conflicto armado en el departamento.

El Derecho Internacional Humanitario consagra la protección de los derechos de los jóvenes en los conflictos armados tanto de carácter internacional como internos. Los instrumentos que se refieren a dicha protección son particularmente el Convenio IV sobre Protección de Personas Civiles en tiempos de guerra (Art. 24), el artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales I y II de dichos Convenios. Sin embargo, los jóvenes tienen derecho a que les sean aplicables las demás normas que se establezcan a favor de combatientes y víctimas de los conflictos, partiendo de su condición de seres humanos antes que jóvenes.

En los Protocolos Adicionales se hace más explícita la protección y establece la prohibición de la participación jóvenes en los conflictos armados. Se da una mayor protección con relación a la participación de los jóvenes en los conflictos armados de carácter no internacional por cuanto prohíbe no solamente la participación directa sino también la participación indirecta de los jóvenes en las hostilidades.

Colombia ratificó e introdujo a la legislación interna los Instrumentos base del Derecho de Ginebra, de ahí que esté obligada a respetar y aplicar estas normas. Eso no significa que ésta obligación esté solo en cabeza del Estado, porque el DIH obliga a las partes del conflicto, sin importar si son de origen estatal o no. Por otra parte, son muchos los instrumentos y recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, que propenden por la defensa y protección de los derechos de los jóvenes, tendiendo siempre a que dicha protección se haga cada vez más extensiva y obligatoria para los Estados Parte. Naciones Unidas ha trabajado de forma sistemática, de esta manera ha permitido que sus informes, recomendaciones y acuerdos sean aplicables y se mantengan vigen-

tes, ofreciendo mecanismos que faciliten la implementación de políticas institucionales encaminadas a la protección universal de los derechos humanos.

La región del Pacífico Colombiano había estado al margen del conflicto armado durante mucho tiempo, si bien algunos reductos de grupos guerrilleros tenían estas áreas como zonas de retaguardia, no se desplegaba en este territorio un accionar de confrontación militar de la magnitud que ha tomado a partir del año 1996.

Desde ese entonces hasta el presente, el conflicto armado amplió sus fronteras y se profundizó en el Pacífico, lo cual se ha manifestado en la emergencia de grupos paramilitares, el crecimiento de frentes guerrilleros, la consolidación de una presencia de la fuerza pública, particularmente del ejército y la infantería de marina.

Los hechos de violencia ponen de manifiesto que la mayoría de las víctimas ha sido la población no armada, lo cual se ha expresado en múltiples masacres como la del Naya, en abril de 2001 y la de Bojayá, en mayo de 2002, que lamentablemente no han sido las únicas, pues las otras masacres de menor cuantía, así como los asesinatos continuos y selectivos, como es el caso de Buenaventura, Tumaco, Quibdó y muchas otras cabeceras municipales de la región, constituyen un auténtico genocidio, contra la población afrocolombiana e indígena.

La muerte ha estado acompañada del desplazamiento forzado, flagelo que aún no se detiene y que en muchos de los casos pervive, pues los procesos de retorno han sido escasos, de tal manera que la gente del Pacífico se ha visto obligada a tener una nueva diáspora, a salir de sus tierras para estar concentrados en los centros urbanos de la región pacífica y en zonas periféricas de las grandes ciudades.

Estas manifestaciones de violencia, son presentadas como resultado de una guerra “irracional”, de la acción de unos bandidos que

solo les interesa ver sangre y terror. Esta visión amerita ser revisada, pues otros análisis permiten dar cuenta que esta guerra no es “irracional”, sino que tiene una lógica, por lo tanto, una racionalidad.

El panorama de la violencia en Colombia

Los grupos armados que operan en Colombia son menos sólidos y más numerosos que los que actuaban hace un lustro. Se han incrementado los escenarios de disputa de los territorios y han diversificado sus fuentes de financiamiento. En las áreas donde tales enfrentamientos se presentan, la población está cada vez más a merced de la arbitrariedad de grupos que, por su propia debilidad, requieren acudir a mayor violencia para alcanzar sus objetivos y por su naturaleza están cada vez alejados del acatamiento de códigos de respeto de la población. En la actualidad es más difícil precisar las fuentes de violencia e identificar el perfil de las personas en riesgo.

Los grupos armados concentran sus actividades en lugares donde encuentran ventajas comparativas para mantener sus acciones y obtener de ellas rentas que les permitan garantizar su subsistencia. Por eso, las zonas marginadas del desarrollo y con baja presencia institucional son útiles para la explotación directa de recursos -coca, minería ilegal- o para obtener beneficios de otros como en el caso de la extorsión al comercio, a actividades relacionadas con economías extractivas e incluso frente a la obtención de recursos a partir de las acciones del Estado, como es el caso de la extorsión a funcionarios públicos y a beneficiarios de subsidios estatales.

La concentración del impacto de la violencia se da también en zonas de ocupación histórica de grupos guerrilleros, en donde además se ha focalizado la acción de las Fuerzas Armadas en la persecución de las figuras más visibles de los grupos guerrilleros. Así mismo, en lugares donde se ha aglu-

tinado la retaguardia de la guerrilla ante el desplazamiento generado por la actividad de las Fuerzas Armadas en otras zonas del país y que ha llevado a los grupos subversivos a ubicarse en zonas más profundas de las selvas amazónicas y de la Orinoquía. El riesgo para la población se eleva también en zonas de frontera en las que el nivel de intensidad del accionar de la guerrilla podría estarse fortaleciendo ante el cierre de los espacios que ha tenido en países fronterizos, que incluye tanto el área que limita con Ecuador, Panamá y Venezuela y que se refleja en su comportamiento en departamentos como el Chocó, Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Nariño.

En el panorama de violencia y desplazamiento aparece en los últimos años el archipiélago de San Andrés y Providencia, que no hacia parte de la geografía de la violencia del país y que se ha convertido en zona de disputa de organizaciones armadas por su ubicación estratégica en el tráfico de drogas hacia el norte del continente.

De igual manera, empieza a emerger el departamento del Amazonas en el sur oriente, en la frontera con Brasil y Perú, por razones similares. Los hechos de violencia también se presentan en forma más intensa en zonas donde persisten conflictos de tierras, en especial en aquellas en las cuales se debate la vocación productiva de las mismas y el uso de los suelos; de igual manera, en sitios donde se llevan a cabo procesos de restitución que afectan inversiones efectuadas durante los años del desplazamiento, como es el caso del Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y Magdalena Medio para citar algunos

La identificación de personas, comunidades y regiones en situación de riesgo, al igual que la respuesta requerida para propiciar su protección, exige un continuo seguimiento a la situación política, de conflicto armado y violencia del país y a las emergencias generadas por los desplazamientos forzados. La velocidad con la que se presentan los cambios políticos al igual que los cambios de inten-

sidad en la violencia, tanto en su dimensión regional como el mayor riesgo temporal sobre determinados sectores de la población, hace necesario efectuar actualizaciones periódicas que faciliten respuestas en protección acordes con las necesidades de la población.

El principal antecedente mediato de la situación actual en el conflicto puede encontrarse a comienzos de la década de los noventa, cuando dos de los principales grupos guerrilleros, las Farc y el Eln, se apartaron de los procesos de paz de esa época, algunos de los cuales sí condujeron a la desmovilización de otras guerrillas: entre ellas, el Movimiento Quintín Lame, el M-19, el EPL y el PRT (García Durán, 1992).

Incidencia de la violencia en los jóvenes

Durante el siglo xix y buena parte del siglo xx, los partidos políticos tradicionales recurrieron a la violencia para dirimir las disputas por el poder y, en particular, para lograr el dominio del aparato estatal, a tal punto que este accionar puede considerarse como una constante histórica de varias décadas.

En efecto, la pugnacidad política y las acciones violentas entre los partidos tradicionales, liberal y conservador, alcanzaron su nivel más crítico en el periodo conocido como La Violencia, que comprende desde 1946 hasta 1958. Aunque la violencia liberal conservadora fue promovida por la dirigencia de ambos partidos, el enfrentamiento político se vio especialmente atizado por el sectarismo manifiesto del dirigente conservador Laureano Gómez, presidente de la República entre 1950 y 1953. A partir de entonces, el conflicto político se tradujo en una abierta confrontación armada.

La guerra se mantuvo y acrecentó de manera inusitada. Las «estructuras de oportunidad» que explican esta persistencia incluyeron factores como: la debilidad del Estado, la dificultad de las élites para lograr acuerdos

para superarla y la ineficiencia de varios gobiernos para identificar y actuar en coyunturas críticas; dos de las mayores crisis políticas de la historia del país generadas por los carteles de la droga, y estimuladas por el alto grado de corrupción de la clase política; el carácter predatorio de todas las organizaciones armadas, insensibles a la opinión y el sufrimiento de la población; el narcotráfico que sirvió de fuente de financiación de los aparatos armados, las condiciones sociales en el campo que posibilitaron el ingreso de algunos colombianos a los ejércitos privados y el reclutamiento forzado; las múltiples contiendas que, además del conflicto entre Estado e insurgencia, abarcó enfrentamientos de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, y entre cada uno de ellos; el uso de las negociaciones por parte de la insurgencia como táctica para escalar la guerra.

Problemáticas sociales en las zonas cocaleras y sus consecuencias en los jóvenes de Tumaco y Ricaurte

La guerra ha afectado a hombres y mujeres, ha traumatizado y dañado a las familias y las comunidades y sigue siendo parte de la vida de la comunidad nacional, aunque estamos en un proceso de negociación de paz en la Habana, en donde se encuentran sentados en una mesa de negociación la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, a través de los representantes nombrados para hacer esta negociación. La negociación, que ya dura más de 2 años, aún no ha concluido y se encuentra en un momento crítico. Se han dado avances significativos, pero hay muchas fuerzas oscuras de la economía y la política nacional que no están interesadas en que el proceso concluya exitosamente. Las huellas de la guerra han sido muy destructivas y la población civil se encuentra entre los sectores más vulnerables, específicamente niñas y niños, quienes han recibido el daño y las consecuencias según sus edades, experiencias vividas y condiciones del contexto. Tenemos que decir que la guerra en Colombia

ha causado la muerte de miles de niños y niñas, algunos en las masacres y otros en los enfrentamientos entre sectores armados. Los niños y niñas han fallecido también por causa de campos minados, por incursiones y ataques en sus pueblos y han sido víctimas de casi todas las modalidades de violencia. Digamos que cerca de 2 millones y medio de menores de edad han sido desplazados; 70.000 han sido víctimas de violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, minas antipersonas y reclutamiento forzoso en las filas de la guerrilla y por paramilitares.

Han experimentado la violencia de manera dramática y cruda, porque han sido testigos de hechos atroces, como el asesinato y tortura de sus padres, madres, familiares y vecinos, la quema y destrucción de sus hogares, animales y objetos personales. Han quedado con marcas permanentes en sus cuerpos. Han sufrido la amputación de sus miembros por minas antipersonas. Han sufrido abuso sexual, tortura, reclutamiento ilícito, entrenamiento para la guerra por parte de los grupos armados. Han sido reclutados por esos grupos armados, entregados para ser criados por las familias de sus captores, arrancados de sus familias y comunidades y quienes han sobrevivido huyen de la guerra en condición de desplazamiento forzado. Todo lo anterior es parte de una historia que todavía hoy se mantiene en muchos territorios del país (Muñoz, 2015).

Delimitación de la investigación, Sembrando Paz

Espacio: esta investigación se realiza en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, con los estudiantes de las tecnologías en sistemas agroforestales, producción animal y el programa técnico en materias primas agroindustriales, beneficiarios del proyecto de Capacitación en Agroforestería y Cambio Climático del convenio interadministrativo UNAD-MEN No. 1402, ubicados en los municipios de Tumaco y Ricaurte.

Tiempo: el período considerado para la ejecución de la presente investigación es de 5 meses.

Participantes: los participantes directos de la investigación son 50 estudiantes, 20 estudiantes matriculados en las tecnologías de sistemas agroforestales y producción animal de la UNAD pertenecientes a los municipios de Tumaco y Ricaurte y 30 estudiantes de la CUN del programa técnico en materias primas agroindustriales.

Al finalizar la investigación realizada con los 50 estudiantes del convenio interadministrativo UNAD-MEN se evidenció que existe por parte de algunos estudiantes ausencia de un verdadero sentido de pertenencia para con la comunidad generando constantes sufrimientos que se han evidenciado a través de los años en el margen del conflicto armado, esta situación afecta considerablemente las representaciones sociales frente a un proyecto de vida saludable por otra parte, la falta de oportunidad, así como las consecuencias de la violencia, el desarraigo, la vulneración de derechos, la pérdida de vida humanas y el no contar con recursos económicos suficientes así como el deterioro de territorio no ha favorecido plantear un proyecto de vida acorde a sus necesidades y por ende resignificar sus representaciones, acerca de su sentido de vida de los participantes que informaron se encuentra que: 20 (40%) son beneficiarios de la UNAD de los cuales 10 (50%) son de Ricaurte 4 de ellos son mujeres y 6 de género masculino; 8 de los beneficiarios del municipio de Ricaurte se encuentran inscritos en la tecnología de sistemas agroforestales y 2 en la tecnología de producción animal.

Así mismo 10 (50%) de los beneficiarios del proyecto que se encuentran matriculados en la UNAD pertenecen al municipio de Tumaco de los cuales 7 son mujeres y 3 hombres; 8 de los beneficiarios se encuentran matriculados en la tecnología en sistemas agroforestales y 2 en tecnología en producción animal.

De la Institución CUN se encuentran beneficiados 30 (60%) estudiantes de los cuales del municipio de Ricaurte son 11 estudiantes, 7 de ellos son mujeres y 4 hombres los cuáles se encuentran cursando el programa técnico en materias primas agroindustriales, en el municipio de Tumaco se encuentran los 19 estudiantes, de los cuales 11 son hombres y 8 mujeres matriculados en el programa técnico en materias primas agroindustriales.

En total se trabajó con 26 hombres y 24 mujeres beneficiados de la alianza agroforestal para el desarrollo rural.

Equipo interdisciplinar: director del proyecto, coordinadora psicosocial, equipo psicosocial, Tutores de apoyo UNAD-CCAV Pasto.

Fortalecimiento Alianza Agroforestal para el Desarrollo Rural – UNAD-MEN

Como aporte desde la comunidad educativa para resignificar la responsabilidad social de los territorios en el sur del país para la conservación del medio ambiente y contribuir al cambio climático es de gran impacto, pretendiendo transformar vidas a partir de:

- Educación y capacitación.
- Formación.
- Sujeto de derechos.
- Asistencia técnica.
- Acompañamiento psicosocial.
- Transformación.

Permitiendo la inclusión social, participación activa, resignificación del sentido de vida, resiliencia, reconociéndolos como sujetos de derechos brindando asistencia técnica y entregando a la sociedad personas productivas que aporten desde sus comunidades al impacto positivo del cambio climático y transformación social, cultural y personal.

Mediante el convenio interadministrativo UNAD-MEN No. 1402 se ha logrado el em-

poderamiento de los estudiantes y por tanto del ser humano quienes se constituyen en la principal herramienta a través del cual una vez identificadas las necesidades de un sector poblacional concreto, se contribuye a la disminución de la vulnerabilidad a través de herramientas que hagan más autónoma a la persona y donde ella misma auto gestione sus necesidades, así mismo; por otra parte cobra gran valor la puesta en marcha de la aplicabilidad de la responsabilidad social ambiental con la cual se da re significación al sentido de vida y valor para transformar y crear un entorno sostenible.

Por lo tanto, el empoderamiento de las comunidades en situación de violencia puede transformar la economía global y liberar la riqueza social aportando a la paz, cuando los actores sociales a partir de sus motivaciones, experiencias, actitudes y comportamientos se unen en la lucha de un interés colectivo y contribuyen a un desarrollo sostenible y sustentable en sus territorios.

La percepción de algunos estudiantes víctimas del conflicto armado, así como de miembros del profesorado, evidencia los retos para el escenario posterior a las negociaciones de La Habana en torno al derecho a la educación como parte del proceso de reparación de las personas víctimas del conflicto armado.

La universidad y el derecho a la educación

La Universidad, como espacio de socialización, es un lugar privilegiado para tejer y afianzar las redes de apoyo y cooperación, y ella cobra una importancia esencial en la estrategia de reparación integral de las víctimas del conflicto armado. La situación de vulneración afecta directamente las posibilidades que tienen las víctimas de acceder y permanecer en el sistema educativo.

La vulneración hecha a las víctimas del conflicto armado, particularmente como resultado del desplazamiento forzado, no solo conduce

a que se pierdan el lugar de residencia y algunos vínculos familiares. Es importante resaltar que el hecho de considerar la educación como un derecho compromete al Estado en la obligación de “volver a la educación asequible, accesible, aceptable y adaptable” (Tomasevski, 2004). El sistema de las 4A fue el resultado de observar a la educación desde la óptica de los derechos humanos, definidos por: i) la obligación de asequibilidad o derecho a la disponibilidad de la enseñanza; ii) el derecho al acceso de la enseñanza; iii) el derecho a una educación aceptable, es decir, de calidad en la perspectiva de las familias y de los estudiantes de ambos sexos) el derecho a una educación que se adapte a los requerimientos de los estudiantes y garantice de esa manera su permanencia en el sistema educativo.

Resultados de la alianza

Gracias a la oportunidad brindada por el MEN la universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD hoy es pionera en brindar oportunidades de vida a las comunidades menos favorecidas Tumaco y Ricaurte regiones golpeadas por la violencia Colombiana hoy son gestores de paz con oportunidades de vida para cambiar su sentido y proyecto de vida, la re significación de sus representaciones sociales junto a un modelo pedagógico flexible e integral permitieron el desarrollo de un proyecto agroforestal que contribuyera al desarrollo rural y a la paz colombiana.

Desde las regiones de la costa pacífica Nariñense un grupo de nuevos profesionales entregaran al país conocimientos en Agroforestería, Producción animal con una visión transformadora e integradora que visibilice las competencias educativas con un componente humanístico y social el cual se logró gracias al compromiso ético, moral y social del equipo interdisciplinario de la UNAD -Pasto, líder del proyecto, Equipo Psicosocial, Tutores y estudiantes

Con oportunidad e igualdad de derechos se construirá un mejor territorio en la costa pacífica nariñense UNAD_MEN comprometidos con la construcción de paz desde las regiones del post conflicto.

La Alianza agroforestal para el desarrollo rural impacta positivamente en el marco del post acuerdo sembrando semillas de paz en un grupo de cincuenta jóvenes de bajos recursos económicos pertenecientes a las etnias, afros, raizales y mestizos de los municipios de Tumaco y Ricaurte.

Que el artículo 209 de la constitución política de Colombia ordena a las autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado. Con el fin de cerrar brechas entre la ciudad y el campo, el gobernó Nacional evidencio la necesidad de desarrollar diferentes planes sectoriales en el punto 1. "REFORMA RURAL INTEGRAL" del acuerdo final para el post conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por la FARC_EP, los cuales deben asegurar la integración de las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno goce y disfrute de los derechos de la ciudadanía.

Fuente. Artículo 209CPC- Convenio interadministrativo número 1402 UNAD_MEN.

Conclusiones

La caracterización del conflicto armado colombiano debe ser vista como una actividad académica inacabada y sometida a múltiples presiones y revisiones fundamentadas, especialmente, en argumentos político ideológicos. Por ello es necesario dejar en claro que no existe una única teoría que explique o analice la naturaleza y las características

de los distintos conflictos armados internos, especialmente en el caso colombiano, pues, debido a su complejidad y longevidad y a las cambiantes dinámicas político-militares de sus actores, resulta muy difícil encuadrarlo en una categoría preestablecida.

Para la comunidad educativa: continuar contribuyendo a la reconstrucción de tejido social a partir de la puesta en marcha de programas y proyectos que permitan el que hacer pedagógico participativo formando educandos para el futuro con espíritu crítico, reflexivo que aporten desde sus territorios a la construcción de paz y el fortalecimiento de sus comunidades contribuyendo al mejoramiento de algunas representaciones sociales y propiciando el empoderamiento de la responsabilidad social como gestor de cambio y líder en educación superior, con la modalidad de educación a distancia en Colombia garantizando estándares de calidad académica, teniendo en cuenta que el estudiante tiene los mismos derechos de obtener educación de calidad, tal como se la tiene en una universidad presencial.

Los actores deben hacerse partícipes de las medidas de reparación, la víctima, debe ser escuchada, con el fin de que recupere la tranquilidad y la paz y sea compensada por los daños sufridos. Y que tenga la oportunidad de participar en la resolución del conflicto que le afecta, siendo parte protagonista del proceso. La participación de la víctima en este proceso, dota al mismo de todo su sentido educativo, preventivo e integrador, al posibilitar la toma de conciencia de quién es el otro, cuáles son sus circunstancias, cómo ha vivido el conflicto y su manejo para superarlo. Solamente el tiempo y la memoria las víctimas podrán dar respuesta a la efectividad de la reparación brindada por el Estado.

Referencias

- Chernick, M. (octubre/diciembre, 1996). *Aprender del pasado: breve historia de los procesos de paz en Colombia (1982-1996)*. Revista Colombia Internacional, (36), 4-8.
- García-Durán, M. 1992. *De la Uribe a Tlaxcala: procesos de paz*. Bogotá: CINEP.
- Mafla, E; Andrade, A; Aranzazu, L (2018). Tesis de psicología: Resignificación de las representaciones sociales, acerca de su sentido de vida de los participantes de Tumaco y Ricaurte en el convenio interadministrativo UNAD - MEN con enfoque de cambio climático.
- Muñoz, G (2015). *Conflicto armado en Colombia y sus consecuencias sobre niños y jóvenes (pp.31)*. Colombia.
- Sánchez, G. (2007). *Los estudios sobre la violencia: balance y perspectivas*. En G. Sánchez y R. Peñaranda (Comps.), *Pasado y Presente de la violencia en Colombia* (pp. 17-32). Colombia: La Carreta Editores.
- Tomasevski, K. (2004). *Indicadores del derecho a la educación*. Revista IIDH, 40, 341-388.